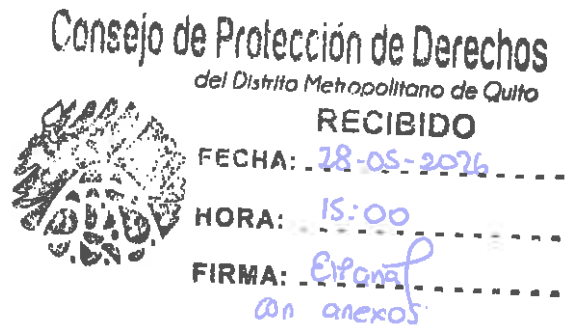


Quito, Distrito Metropolitano, 28 de mayo de 2026
Oficio No. TPHC-CT-CCD-061



Señores

COMISIÓN DISCIPLINARIA

Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito

Con copia a:

- Presidencia del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ
- Secretaría Ejecutiva encargada
- Defensoría del Pueblo – Delegación Provincial de Pichincha

Asunto: Solicitud de procedimiento disciplinario contra la consejera Cecilia Navarrete Hernández por descalificaciones públicas y afectación a mi honra y dignidad.

De mi consideración:

Thanya Herrera Cortés, en mi calidad de Consejera Principal ante el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en representación del Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad, comparezco ante ustedes al amparo de lo establecido en el artículo 14 del Código de Conducta y Régimen Disciplinario del Pleno del CPD-DMQ, con el fin de presentar formal denuncia en contra de la señora Leonor Cecilia Navarrete Hernández, por hechos ocurridos durante la sexta sesión ordinaria del Pleno realizada el 12 de diciembre de 2024.

Durante dicha sesión, la consejera Cecilia Navarrete emitió públicamente expresiones y acusaciones en mi contra sin presentar pruebas que las sustenten, afectando gravemente mi honra, dignidad, buen nombre y trayectoria personal y profesional.

Las afirmaciones realizadas no solo ocurrieron dentro de una sesión oficial del Pleno del Consejo, sino que además fueron difundidas públicamente mediante transmisión en vivo por la plataforma YouTube, exponiéndome ante autoridades, organizaciones, colectivos, personas de la sociedad civil y ciudadanía en general.

Entre otras afirmaciones, se me atribuyeron conductas relacionadas con violencia, discriminación, humillación, abuso de poder y falta de ética, generando una imagen falsa y profundamente perjudicial sobre mi persona y mi trabajo como defensora de derechos humanos y representante de personas con discapacidad.

Considero especialmente grave que este tipo de expresiones se hayan realizado dentro de un organismo cuya naturaleza y finalidad es precisamente la protección de derechos humanos, la dignidad humana y la convivencia respetuosa entre sus integrantes.

El propio Código de Conducta y Régimen Disciplinario del Pleno del CPD-DMQ establece como principios fundamentales:

- el respeto;
- la integridad;
- la ética;
- el compromiso con los derechos humanos;
- así como el deber de mantener relaciones basadas en el respeto, la dignidad humana, la convivencia ética y la prohibición de actos de discriminación, violencia o afectación a la honra y dignidad de otras personas.

En este sentido, considero que los hechos denunciados podrían constituir incumplimientos a lo dispuesto en:

- el artículo 6 numerales 1, 2, 3 y 4;
- el artículo 8 numerales 1, 2 y 6;
- y el artículo 15 literal b), numerales 11 y 12 del Código de Conducta y Régimen Disciplinario del Pleno del CPD-DMQ.

Asimismo, estas actuaciones vulneran derechos constitucionales relacionados con la dignidad humana, el honor, el buen nombre, la integridad personal, la igualdad y no discriminación, reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Debo manifestar además que los hechos denunciados han tenido un impacto emocional y psicológico profundo en mi vida personal y profesional.

Desde que ocurrieron estas acusaciones públicas, he vivido con temor, inseguridad y angustia frente a la posibilidad de que otras personas creen como verdaderas afirmaciones que jamás fueron probadas. El hecho de que estas expresiones continúen expuestas públicamente, ha prolongado el daño y la afectación a mi tranquilidad emocional.

Como persona con discapacidad y defensora de derechos humanos, resulta especialmente doloroso haber sido expuesta públicamente dentro de un espacio institucional donde debía prevalecer el respeto, la protección de derechos y la dignidad humana.

Hasta la presente fecha, lejos de repararse el daño ocasionado, las afectaciones han continuado en mi contra, generando un ambiente de hostilidad que afecta mi seguridad emocional, mi confianza y mi desempeño dentro de los espacios institucionales.

Respecto de la mediación que no acepté, considero importante señalar que los hechos denunciados no constituyen una simple diferencia interpersonal, sino actuaciones que implicaron descalificaciones públicas y afectaciones a mi honor, dignidad y buen nombre, difundidas además en un espacio institucional y de acceso público.

Por ello, la mediación no resultaba un mecanismo suficiente ni adecuado para reparar el daño ocasionado, especialmente cuando las consecuencias emocionales, psicológicas, reputacionales e institucionales continúan hasta la presente fecha.

Adicionalmente, mi derecho legítimo a la defensa y a la réplica me fue negado mediante oficio emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del DMQ, suscrito por la abogada Valeria Urgiles Valle, impidiéndome responder públicamente a las acusaciones realizadas en mi contra.

Resulta profundamente contradictorio y lesivo que, mientras a la señora Cecilia Navarrete se le permitió intervenir públicamente dentro de una sesión oficial del Pleno para emitir acusaciones sin pruebas y afectando gravemente mi dignidad, honra y trayectoria, a mí se me haya negado la posibilidad de ejercer mi defensa y réplica en las mismas condiciones y dentro del mismo espacio institucional en el que fui públicamente descalificada y afectada en mi honra y buen nombre.

La condición etaria de una persona tampoco puede constituir justificación para emitir acusaciones públicas sin pruebas o afectar la dignidad y el buen nombre de otra persona. Todas y todos quienes integramos el Pleno estamos obligados al cumplimiento del Código de Conducta, al respeto mutuo y a la observancia de los derechos humanos.

La presente denuncia no responde a un ánimo de confrontación personal, sino a la necesidad de que dentro del Consejo de Protección de Derechos prevalezcan el respeto, el debido proceso, la convivencia ética y la protección de la dignidad humana.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente:

1. Que se admita a trámite la presente denuncia.
2. Que se inicie el procedimiento disciplinario correspondiente conforme al artículo 14 del Código de Conducta y Régimen Disciplinario del Pleno del CPD-DMQ.
3. Que se investiguen los hechos denunciados y se determine la existencia de posibles faltas disciplinarias graves previstas en el artículo 15 literal b), numerales 11 y 12 del referido Código.
4. Que se garantice el debido proceso, imparcialidad y respeto a mis derechos dentro del trámite correspondiente.
5. Que se incorporen como elementos de sustento:
 - Acta aprobada de la sesión;
 - Certificación de la transmisión oficial de la sesión;
 - documento leído públicamente;
 - oficio relacionado con la negativa del derecho a la defensa y réplica;
 - documentación emitida por el CONADIS.
6. Que esta denuncia sea analizada con enfoque de derechos humanos, dignidad humana y protección reforzada hacia personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

7. Que se adopten medidas Institucionales que permitan prevenir la repetición de hechos similares y garanticen que ninguna persona vuelva a atravesar situaciones de humillación, descalificación pública o afectación a su honra dentro del Consejo de Protección de Derechos del DMQ.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lic. Thanya Herrera Cortés

Consejera Principal ante el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ
Representante del Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad

Adjuntos: Documentación anunciada en el numeral 5